

política exterior, el Barón de Rio Branco organizó a comienzos de este siglo el servicio exterior contemporáneo de Brasil. El Itamaraty constituye, desde entonces, el ministerio de Relaciones Exteriores más eficiente de América Latina. Rio Branco trazó, así mismo, ciertos lineamientos generales de la política exterior brasileña, que fueron cumplidos posteriormente. Brasil aspiraría a la hegemonía en América del Sur, pero no por métodos violentos sino por las armas de la diplomacia. En su lucha por el puesto de árbitro de Sudamérica, Brasil actuaría en alianza con la mayor potencia hegemónica externa: Gran Bretaña y, posteriormente, con Estados Unidos. En ese sentido su política se diferencia de la de Argentina que igualmente aspiraba a una posición influyente en América del Sur, pero tendía a buscar esa meta mediante una política contraria al imperialismo externo más importante.

La Revolución Mexicana y sus efectos internacionales

México fue sacudido por la Guerra de la Reforma, la intervención francesa y el gobierno de Benito Juárez, pero el liberalismo ascendente no fue capaz de cumplir enteramente con su programa. Juárez murió en 1872, y al cabo de un breve lapso de confusión le sucedió en el mando el general Porfirio Díaz, seguidor y lugarteniente del gran tribuno desaparecido. A diferencia de éste, Porfirio Díaz carecía de verticalidad doctrinaria y de sincera identificación con las masas populares. Desde que asumió la presidencia en 1876 se fue inclinando progresivamente hacia la derecha. Surgido del liberalismo y del movimiento popular de la Reforma, gradualmente se transformó en un autócrata apoyado por la oligarquía latifundista, el clero conservador y, sobre todo, por los intereses imperialistas norteamericanos. Abrió el país a los inversionistas extranjeros, otorgándoles concesiones mineras y agrícolas. Duro hacia su propio pueblo, se mostró flexible ante los intereses foráneos. Con mano dura garantizó a los capitalistas norteamericanos la "tranquilidad social"; durante su dictadura no hubo huelgas ni reivindicaciones obreras efectivas. En el medio rural este antiguo reformista actuó como defensor del orden feudal y de los intereses latifundistas. Bajo el opresivo régimen de Porfirio Díaz los campesinos mexicanos vivían en una situación parecida a la de los siervos de la gleba en Europa medieval o en la Rusia zarista. Se les mantuvo en total sujeción a los amos de la tierra y, en muchos casos, su condición era de virtual esclavitud. El pueblo humilde y los intelectuales gemían bajo el porfiriato, mientras la prensa internacional, vinculada a los grandes intereses económicos, elogiaba al dictador como paladín del orden y de la "civilización".

Pese a todo ello, la penetración imperialista preparaba objetivamente su propia derrota. En torno a las concesiones mineras y petroleras, a los establecimientos comerciales extranjeros, y a los ferrocarriles construidos con capital y técnica yanquis, se formaba una clase obrera y surgían núcleos de profesionales e intelectuales de mentalidad moderna, desengañados y revolucionarios.

Para fines de 1910 Porfirio Díaz trató de hacerse reelegir una vez más. Los mexicanos se alzaron contra la reelección y pidieron la democratización del país. Ante la negativa de Díaz de entregar el poder, Francisco Madero encabezó un movimiento revolucionario armado, que contó con el apoyo de todo el pueblo. Al lado de intelectuales, capas medias y obreras, las masas campesinas despertaron de

el embargo. Madero estableció un gobierno revolucionario provisional y convocó a una asamblea constituyente. Mirado por el imperialismo como peligroso agitador, Madero fue demasiado vacilante con los trabajadores revolucionarios. En noviembre de 1911 el dirigente campesino Emiliano Zapata se alzó contra Madero en vista de que éste se negaba a poner en práctica la reforma agraria deseada por los explotados del campo. Por otro lado, los latifundistas y demás sectores privilegiados del país, apoyados por los inversionistas extranjeros y el embajador norteamericano Henry Lane Wilson, conspiraron desde la derecha. En 1913 el general Victoriano Huerta, originalmente al servicio de Madero, se rebeló contra él, lo apresó y separó de su cargo. Posteriormente, Huerta fue asesinado.

La implantación de la dictadura contrarrevolucionaria de Huerta fue saludada con júbilo por los capitalistas extranjeros que creían en el retorno a los buenos tiempos del porfiriato. Pero el pueblo mexicano no estaba dispuesto a renunciar a la democracia y a la liberación nacional. En el Norte, Pancho Villa se alzó contra Huerta. Igual cosa hizo Emiliano Zapata a la cabeza de sus campesinos sedientos de tierra y de justicia. El general Venustiano Carranza, demócrata y patriota vinculado al movimiento obrero y a las capas medias urbanas, asumió la jefatura principal de la lucha revolucionaria contra el régimen huertista.

En Estados Unidos, los capitalistas eran obviamente partidarios de Huerta y vehementes enemigos de la Revolución Mexicana. No así el presidente Woodrow Wilson que, en este caso, se apegó a los ideales democráticos que en otras oportunidades tendía a abandonar. Contra las presiones de los sectores económicos, Wilson mantuvo el punto de vista de que había que apoyar a Carranza y no a Huerta. Venustiano Carranza era revolucionario y demócrata, pero más moderado que Zapata y Villa, y dispuesto a permitir que el capital extranjero siguiera participando en la vida económica mexicana, con tal de someterse a la supervisión efectiva y soberana del poder público nacional. El presidente Wilson desautorizó la política seguida por Taft y su embajador Henry Lane Wilson, y se negó a reconocer al gobierno de Victoriano Huerta. El disgusto de los capitalistas norteamericanos se comprende cuando se recuerda que el monto total de sus inversiones en México era, para 1913, de 1.000 millones de dólares. Cincuenta mil norteamericanos vivían y trabajaban en tierra mexicana. Así mismo, los intereses británicos y alemanes en México eran considerables, y tanto el gobierno de Londres como el del Kaiser eran partidarios de Huerta y se sentían irritados por la actitud que Woodrow Wilson adoptó en este caso.

En 1914 Wilson dio otro paso favorable a la corriente revolucionaria moderada de Carranza y contraria a la corriente huertista, al permitir la venta de armas a aquél mientras mantenía el embargo contra el gobierno de Huerta. La derecha norteamericana e internacional se lanzó contra Wilson. Los ingleses y alemanes, así como también contrabandistas yanquis, intensificaron su apoyo a Huerta. Los intereses petroleros norteamericanos e ingleses estuvieron a la vanguardia del grupo de presión pro Huerta y favorable a una intervención "civilizada" que pusiera fin a la Revolución Mexicana. En 1914 los gritos de intervención se hicieron más fuertes al conocerse la noticia de que unos setenta norteamericanos habían perdido la vida por la violencia que había en el sur del Río Bravo.

Efectivamente, en 1914 una intervención armada norteamericana se produjo a raíz de un incidente en Tampico, donde la bandera de Estados Unidos fue agraviada

por fuerzas mexicanas dependientes del gobierno de Huerta. Wilson exigió disculpas y un saludo de 21 cañonazos a la bandera norteamericana. Huerta aceptó pedir disculpas, pero no el homenaje de los 21 cañonazos. En el mes de abril tropas de infantería de marina norteamericana desembarcaron en el puerto de Veracruz. Esta intervención provocó una tregua y una momentánea unidad de acción entre todos los bandos mexicanos, incluido el de Huerta. Este, así como Carranza, Zapata y Villa, fueron unánimes en condenar la intervención y en exigir la salida de los yanquis del territorio mexicano. Se rompieron las relaciones entre Estados Unidos y México.

En ese momento se produjo una gestión diplomática de las potencias "ABC" (Argentina, Brasil y Chile), que ofrecieron su mediación entre México y Estados Unidos. Por efecto de los buenos oficios de los ABC, se realizó una conferencia en Niagara Falls, en la cual participaron esos tres países además de México y Estados Unidos. Se llegó a un acuerdo de reconciliación y retiro de las tropas norteamericanas de México. Poco después, el general Huerta, asediado por las fuerzas revolucionarias, presentó su renuncia y salió al exterior. Venustiano Carranza asumió la presidencia del país.

Aunque había contado con el apoyo de Zapata y Pancho Villa en el combate contra la reacción huertista, Carranza pronto fue abandonado por esos revolucionarios radicales. Zapata insistía en una reforma agraria inmediata y profunda, que quebrara el latifundio y estableciera cooperativas campesinas en todo el país. Además, él y Villa miraban con desconfianza la relativa moderación del nacionalismo de Carranza y su disposición a mantener contactos con el gobierno de Wilson. En 1915, los dos líderes populares, el uno en el centro-sur y el otro en el norte de México, recomenzaron la guerra revolucionaria, esta vez contra Carranza. En cierto modo fue la lucha del campo contra la ciudad. La clase media urbana y también los sindicatos obreros apoyaban a Carranza, mientras que a Zapata le seguía la clase más pobre, oprimida y numerosa: el campesinado, indígena en su mayoría. Pancho Villa, de criterio político y conciencia social menos formados que Zapata, encabezó tropas campesinas en el Norte, en la zona limítrofe con Estados Unidos.

Ante la hostilidad que Estados Unidos mostraba hacia la Revolución Mexicana, durante 1916-1917 Pancho Villa invade el territorio de ese país y da muerte a 35 ciudadanos. Presionado por una opinión pública condicionada desde hace tiempo por la incesante propaganda antimexicana de los grupos capitalistas, Wilson presentó un ultimátum al gobierno de México: si éste no lograba dominar y controlar a Pancho Villa, los norteamericanos intervendrían por la fuerza para acabar con las andanzas de ese caudillo. Como Carranza tuvo que admitir su incapacidad para controlar a Villa, el gobierno norteamericano envió al general Pershing, con una columna de caballería, a penetrar en territorio mexicano y perseguir a los guerrilleros villistas. Esa intervención táctica, con un número reducido de tropas, era insignificante en comparación con lo que pedían los consorcios capitalistas: nada menos que la guerra en gran escala y la ocupación de todo México.

Pershing obligó a Villa a replegarse hacia el Sur, aunque no logró infligirle daños serios. En vista de que se agravaba la situación internacional y que Estados Unidos se disponía a entrar en la Primera Guerra Mundial, Wilson ordenó a Pershing que se retirara de México al cabo de pocos meses.

En ese mismo año (1917) se consolidó el poder del gobierno del general

Venustiano Carranza, a pesar de que los zapatistas continuaban la guerra. En el transcurso de su combate, Emiliano Zapata se radicalizó más. Al comienzo había proclamado una reforma agraria moderada que sólo expropiaría una tercera parte de los terrenos de cada latifundio y pagaría indemnizaciones a los terratenientes afectados; al final llegó a proclamar la lucha de clases violenta, la expropiación sin indemnización y la aplicación de fórmulas agrarias socialistas. Para combatir el zapatismo, Carranza y su lugarteniente y sucesor Alvaro Obregón utilizaron la represión pero también la reforma. La promulgación de la Constitución Mexicana de 1917 —instrumento jurídico revolucionario que a partir de ese momento sirvió de modelo para todas las Constituciones progresistas latinoamericanas— indicó que el gobierno de Carranza acogía la teoría de una transformación antifeudal y socialdemócrata de las estructuras, a la vez que afirmaba el control del Estado sobre los recursos y rechazaba el imperialismo. La Constitución de 1917 no sólo reconoce los derechos tradicionales, liberales, del hombre y del ciudadano, sino que además enumera sus derechos sociales al trabajo, a la tierra, a una vida material digna, a la seguridad social. De aplicar realmente todos esos principios, el Estado mexicano se vería obligado a adoptar medidas que van más allá del capitalismo y abren la puerta a una democracia socialista. Así mismo, la total aplicación de las normas que la Constitución establece para el control nacional sobre los recursos del país y sobre su desarrollo económico, así como para la defensa contra el imperialismo económico extranjero, requeriría la nacionalización de los medios de producción más importantes y la incuestionable primacía del sector público sobre el privado. La magna carta de la Revolución Mexicana, elaborada bajo el gobierno de Carranza en 1917, representaba un llamado a que la revolución continuara, para que no se aceptara su estancamiento y no se permitiera el surgimiento de nuevos privilegios. Era un documento "rojo" que espantó a los norteamericanos, y cuyos planteamientos tanto Carranza como Obregón no estaban dispuestos a llevar a la práctica en su total dimensión revolucionaria y humanista. Zapata continuó su lucha hasta que sus enemigos recurrieron a la alevosía: en el año 1919, mediante una traición, el admirable jefe agrarista fue asesinado.

El impacto ideológico y emocional de la Revolución Mexicana sobre el resto de América Latina fue inmenso. El valiente pueblo de Hidalgo, Juárez y Zapata había demostrado que los pobres y los desamparados de la América morena son capaces de sacudir el yugo del imperialismo yanqui y de las oligarquías nacionales. Hasta el año 1959, cuando surgió la Revolución Cubana como un nuevo ensayo de liberación del hombre latinoamericano, la Revolución Mexicana y el estímulo externo de la Revolución Soviética constituyeron las dos fundamentales fuentes de inspiración para los obreros, los campesinos y los intelectuales revolucionarios de nuestro continente.

Latinoamérica y Estados Unidos de 1920 a 1932

Desde la Primera Guerra Mundial, la hegemonía económica de Estados Unidos sobre América Latina fue completa e incuestionable. De manera general, dicho país se había convertido en el banquero del mundo y acreedor de todas las naciones. En lo político, el coloso tuvo una reacción aislacionista, negándose a participar en la

Sociedad de las Naciones y a asumir compromisos multilaterales con los demás países de la tierra. En cambio, en lo económico, Estados Unidos intervino y participó en grado creciente en la vida de los pueblos de todos los continentes. El propio aislacionismo político tenía un carácter claramente imperialista: reflejaba el deseo de los grupos dominantes norteamericanos por conservar una entera libertad de acción y de intervención ante los demás países del mundo.

Las administraciones derechistas de los presidentes norteamericanos Harding (1921-1925), Coolidge (1925-1929) y Hoover (1929-1933) continuaron una política de intervención directa en la zona del Caribe, y de presiones o intervenciones indirectas en América del Sur.

Las relaciones entre Estados Unidos y México conservaron durante ese lapso un carácter de hostilidad y tensión. A partir de 1920, el presidente Alvaro Obregón continuó las iniciativas nacionales y de transformación social emprendidas por el gobierno de Venustiano Carranza. Con la desaparición de Zapata y de Villa, el poder revolucionario se centralizó en manos de Obregón, y disminuyó la violencia en el país. La reforma agraria tuvo progresos y el papel de los sindicatos en la toma de decisiones fue considerable. El gobierno aplicó medidas de nacionalismo económico que amedrentaron al capital extranjero pero fortalecieron el control del Estado sobre las actividades productoras y enrumbaron el país hacia un desarrollo autónomo, con base en la participación mixta del sector público y del sector privado. La actitud de los intereses capitalistas norteamericanos y de la prensa controlada por ellos fue de sistemática hostilidad contra México. Se denunciaba a los dirigentes mexicanos como "bolcheviques" y se pedía la intervención de Estados Unidos en el vecino país para contener una presunta marea roja que amenazaba a todo el hemisferio. Se exageraba el alcance de la violencia en México y se incitaba a los católicos del mundo en contra de un régimen laico que procuraba separar la Iglesia del Estado y reducir el poder económico y político del clero.

Plutarco Elías Calles, quien asumió la presidencia de México en 1924, dio un ligero viraje hacia la derecha. En primer término, acentuó el elemento autoritario y centralista dentro del poder revolucionario. En segundo lugar, desaceleró la reforma agraria y se mostró menos radical que su predecesor ante el capital extranjero. Expresó las tendencias de la clase media, convertida en burguesía nacional, deseosa de moderar el proceso revolucionario y colocarlo bajo su control. El único ámbito donde Calles extremó el radicalismo fue en el de la lucha anticlerical. Los católicos conservadores, por su parte, desencadenaron contra el gobierno de Calles la sangrienta revuelta de los "cristeros": campesinos fanáticos, alzados contra la revolución, bajo la jefatura de sacerdotes o seglares católicos de extrema derecha, al grito de "Viva Cristo Rey". Estados Unidos, pese a las ligeras concesiones que Calles hizo a sus intereses y a sus puntos de vista, no se dio por satisfecho, y las relaciones continuaron en un plano precario hasta que el gobierno de Franklin D. Roosevelt, después de 1933, las mejoró decididamente.

En América Central y Panamá continuaron las intervenciones norteamericanas durante ese mismo lapso. En Panamá, además de la ocupación permanente de la Zona del Canal, se habían realizado desembarcos de infantes de marina en 1908, 1912 y 1918, dejando el país entero bajo estricta vigilancia política y militar estadounidense.

En Nicaragua los *marines* habían desembarcado en 1912, y desde esa época

hasta 1924 mantuvieron una guarnición permanente en el país. En 1927 volvieron para hacer frente a un movimiento liberal dirigido por el general Sacasa y apoyado por Calles desde México. Ante ese nuevo atropello a la soberanía nicaragüense, se formó un movimiento guerrillero de liberación nacional, capitaneado por el heroico Augusto César Sandino. Ese gran revolucionario —que gozó de prestigio y apoyo internacionales— combatió a los ocupantes norteamericanos y la dictadura económica de la United Fruit Company hasta el año 1933, cuando el gobierno de Roosevelt retiró los *marines* de Nicaragua. En 1934 Sandino fue asesinado por la oligarquía gobernante, y tomó el poder el general Anastasio Somoza, comandante de la guardia nacional que los norteamericanos habían organizado y adiestrado para seguir defendiendo sus intereses cuando sus tropas abandonaran el país.

En República Dominicana, ocupada en 1916, la administración norteamericana continuó hasta 1924. En esa fecha el gobierno fue devuelto a los dominicanos, pero destacamentos militares estadounidenses siguieron en el país, organizando y adiestrando a las fuerzas armadas de cuyo seno surgió el terrible Rafael Leonidas Trujillo. Desde comienzos de la década 1930-1940, Trujillo ejerció una férrea y sangrienta dictadura, totalmente favorable a los intereses económicos y estratégicos norteamericanos; de manera que Estados Unidos continuó una ocupación indirecta del país, por intermedio de uno de sus propios nacionales. Así, las aduanas dominicanas permanecieron en manos de un administrador norteamericano hasta 1940.

En Cuba, Estados Unidos dio su apoyo a la feroz dictadura —favorable a los inversionistas extranjeros— de Gerardo Machado, quien tomó el poder en 1924 y fue derrocado en 1933. En Venezuela mantuvo excelentes relaciones con el dictador Juan Vicente Gómez, quien gobernó de 1908 a 1935. Gómez centralizó el poder y acabó con los caudillos regionales en Venezuela. Duro hacia su propio pueblo y blando ante las potencias extranjeras, otorgó concesiones a los consorcios foráneos. Bajo su gobierno se inició la fase petrolera de la historia económica venezolana.

Con su control directo o semidirecto sobre Nicaragua, Panamá, Haití, República Dominicana y Cuba, y con un gendarme amigo en el emporio petrolero venezolano, Estados Unidos tenía cercado y aislado al México revolucionario, y no necesitaba temer por la estabilidad de su dominación en el área del Caribe.

En Sudamérica los años 1920-1932 produjeron múltiples luchas sociales y políticas dentro de los diversos países, además de algunos conflictos internacionales en los cuales la potencia norteamericana trató de servir como pacificadora, mediadora o árbitro. Ecuador y Perú experimentaron reiteradas crisis fronterizas; desde su independencia, esos países se han disputado la posesión de extensos territorios. Ecuador se basa en una cédula real del 1563 y Perú en otra emitida en 1802. Estados Unidos trató de llevar a las partes a negociar directamente o a aceptar un procedimiento arbitral. Durante el mismo lapso, Venezuela y Colombia procuraron solucionar pacíficamente su conflicto fronterizo, existente desde 1830. Argentina y Chile, que tenían un litigio sobre el Estrecho de Magallanes, llegaron a un acuerdo en 1920. Al mismo tiempo, Chile seguía en controversia con Perú por los territorios de Tacna y Arica. Como ya se señaló anteriormente, en 1926 el conflicto llegó al borde del estallido bélico, pero Estados Unidos logró imponer una solución salomónica para 1929, otorgándose Tacna a Perú y Arica a Chile. El conflicto entre Bolivia y Chile quedó sin solución, reclamando Bolivia su salida al mar.

Dos problemas territoriales latinoamericanos atrajeron la atención de la opinión mundial y fueron llevados ante la Sociedad de las Naciones. Uno de ellos fue el problema de Leticia, entre Colombia y Perú. El poblado de Leticia, reclamado por Colombia, estaba ocupado por los peruanos. En 1932 surgió una situación bélica entre los dos países y fue movilizado el ejército colombiano. Perú, cuyo presidente Sánchez Cerro fue asesinado en aquel momento, mantuvo una actitud moderada y, en 1934, por un protocolo firmado en Río de Janeiro, reconoció la soberanía colombiana sobre Leticia.

La otra cuestión que ocupó la atención de la Sociedad de las Naciones fue la del Chaco, planteada entre Bolivia y Paraguay. Desde 1879 estos dos países buscaban un arreglo sobre el territorio del Chaco. Se habían efectuado diversas negociaciones, sin resultados positivos. En la disputa territorial sobre el Chaco, Bolivia se basaba en los tradicionales límites de la Audiencia de Charcas, mientras que Paraguay fundamentaba su reclamación en las expediciones colonizadoras efectuadas desde Asunción. El presidente boliviano, Hernán Siles (1925-1930), resolvió impulsar con energía la solución del problema del Chaco de acuerdo con los puntos de vista bolivianos. En ese empeño, el gobernante boliviano contó con el apoyo de la Standard Oil Company, interesada en lograr concesiones en la zona del Chaco, mientras que Paraguay fue respaldado por la Royal Dutch Shell, compañía anglo-holandesa. La controversia territorial entre los dos países se agravó por la participación de dos consorcios petroleros transnacionales, que luchaban por la posesión de una zona rica en yacimientos y procuraban utilizar a dos Estados rivales como instrumentos para realizar sus ambiciones. En 1928 tropas bolivianas y paraguayas tuvieron un primer choque violento en el Fuerte Vanguardia. La Sociedad de las Naciones trató de restablecer la paz, y Estados Unidos por su lado se esforzó en el mismo sentido. Continuaron las escaramuzas, tratando Bolivia de extender su territorio hasta el Río Paraguay, vía fluvial que abre la salida al Océano Atlántico. Sin embargo, se logró un acuerdo de tregua firmado en Estados Unidos. La tregua se rompió en 1932, comenzando los combates en gran escala entre los dos países.

Por último, cabe señalar como factores importantes en las relaciones interamericanas las corrientes políticas e ideológicas que surgieron en algunos países latinoamericanos entre 1920 y 1932.

La Revolución Mexicana, como ya lo indicamos, ejerció una influencia considerable sobre el auge de movimientos de renovación democrática, nacionalista y social en todas las regiones de Latinoamérica. En Nicaragua, Sandino actuó inspirado en gran parte por el ejemplo del proceso mexicano. En República Dominicana, los patriotas que opusieron resistencia a la ocupación norteamericana derivaron igualmente parte de su ideario de la Revolución Mexicana. La misma influencia se manifestó en Cuba entre quienes lucharon por derrocar la dictadura de Machado. A su vez, la corriente izquierdista del Partido Liberal colombiano tomó como base el modelo mexicano para su propio programa. Lo mismo ocurrió en el seno de los sectores avanzados del liberalismo ecuatoriano. En Venezuela, la experiencia mexicana fue ponderada por los estudiantes que realizaron la gran protesta de 1928 contra la satrapía de Juan Vicente Gómez.

Un intento por traducir las lecciones de la Revolución Mexicana en una doctrina socialdemócrata antiimperialista fue realizado en 1924 por el joven dirigente de la izquierda peruana, Víctor Raúl Haya de la Torre, al trazar las bases para una

Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) dedicada a la liberación antiimperialista y social de "Indoamérica". Inspirado no sólo por el modelo mexicano, sino también por el soviético y por la lucha del Kuomintang en China, Haya de la Torre estableció como bases de su programa la lucha contra el imperialismo —y a favor de la unidad "indoamericana"—, la nacionalización de tierras e industrias, la internacionalización del Canal de Panamá, y la solidaridad con todos los pueblos oprimidos.

Otra corriente que se formó en la década 1920-1930 para promover la lucha contra el imperialismo norteamericano y a favor de la transformación revolucionaria de la sociedad en América Latina fue la constituida por los grupos y partidos marxistas, inspirados en gran parte por el ejemplo de la Revolución Rusa. En Chile, el Partido Obrero Socialista se inclinó hacia la izquierda, y su ala más identificada con el modelo soviético se le desprendió para constituir el Partido Comunista. Un proceso similar ocurrió en Argentina y en Uruguay. Los primeros partidos comunistas aparecieron en esos países a partir de 1921. En los demás países latinoamericanos se crearon grupos comunistas que, igualmente, desde 1924 en adelante, se transformaron en partidos. En México actuaron en forma legal, ubicándose a la izquierda del ala más radical del Partido Nacional Revolucionario (hoy Partido Revolucionario Institucional-PRI). En la mayoría de los demás países su actuación fue clandestina en aquella etapa. A partir de 1927 la pugna Stalin-Trotsky, que para ese momento dividía a los comunistas de la Unión Soviética, se reflejó en los grupos y partidos marxistas de América Latina. Después de 1928 comenzaron a formarse partidos trotskistas, disidentes de los comunistas vinculados a la línea política de la URSS. Por otra parte, en Perú se realizó un notable intento por crear una versión del bolchevismo adaptada a la realidad latinoamericana: José Carlos Mariátegui (1928), en sus *Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana*, planteó la necesidad de valerse de los instrumentos del marxismo-leninismo para hacer la revolución en América Latina, utilizándolos sin dogmatismo, con espíritu crítico e independiente.

En algunos países los gobiernos renovadores expresaron por momentos el ascenso de las clases medias y de los sectores obreros, y el anhelo de esos grupos de debilitar la influencia imperialista y conquistar una mayor justicia social. En Argentina, Hipólito Irigoyen volvió al poder en 1928 con promesas de nacionalismo económico y cambio social. Esta vez, sin embargo, logró menos resultados que en la oportunidad de su primer gobierno de 1916 a 1922. La crisis económica mundial, con su secuela de desempleo y bancarrotas, golpeó la nación argentina y el reformismo de Irigoyen no tuvo soluciones efectivas que ofrecer. Se creó un ambiente golpista y, finalmente, en 1930 el gobierno legítimo fue derrocado por un movimiento militar de derecha, dirigido por el general José Félix Uriburu. Para 1932 Argentina se encontró gobernada por la corriente oligárquica, sumisa ante el capital extranjero. Entre tanto, Chile también vivía un proceso de ascenso-descenso de sus fuerzas democráticas e independentistas. Arturo Alessandri, con el respaldo de los radicales, hizo el intento de una gestión renovadora en 1920, y otra nuevamente en 1925. En 1927 Carlos Ibáñez despertó breves esperanzas de liberación y de justicia, para luego decepcionar. La crisis económica mundial agravó los problemas sociales del país. En 1932 una alianza cívico-militar de izquierda, encabezada por el general Marmaduke Grove, tomó el poder por la fuer-

za y proclamó una "República Socialista", pero ésta sólo se mantuvo durante unos pocos meses.

Resumen

Se puede afirmar de manera global que entre 1920 y 1932 Estados Unidos mantuvo su hegemonía sobre América Latina, continuando una política intervencionista. Aparte de México, donde la oligarquía semifeudal fue desplazada completamente por una clase media respaldada por obreros y campesinos, los países latinoamericanos conservaron sus estructuras sociales caracterizadas por la concentración de la riqueza y el poder económico y político en manos de élites inclinadas a aceptar la hegemonía norteamericana.

Los métodos de dominación norteamericanos tuvieron un carácter militar y brutal desde el comienzo del siglo hasta 1917. De esa fecha en adelante comenzaron a prevalecer las presiones un poco menos violentas y más indirectas.

A partir de 1897 Estados Unidos comenzó a desplazar la influencia inglesa del área del Caribe y del norte de Sudamérica. En 1901 se efectuó un tácito reparto de esferas de influencia: hegemonía estadounidense al norte del Amazonas y predominio inglés más al sur de la región amazónica.

Aparte de la Revolución Mexicana, surgieron otras diversas reacciones y rebeliones latinoamericanas en contra de la dependencia semicolonial existente. Por el momento, esos movimientos permanecieron en una etapa defensiva y a veces sólo incipiente.

La crisis económica y la política de Franklin D. Roosevelt

Súbitamente, en 1929 surgió en Estados Unidos la gran crisis económica que pronto se extendería y afectaría a todo el mundo capitalista.

Desde la Primera Guerra Mundial en adelante la economía norteamericana había experimentado un ininterrumpido proceso de expansión. Bajo un régimen de irrestricta libertad de empresas, sin intervención alguna del poder público, se producía cada vez más y subían los valores negociados en la bolsa de Wall Street. La nación entera vivía con la esperanza y la ilusión de enriquecerse de modo continuo y sin límites. Eran los años del aislacionismo, de la autosuficiencia, del materialismo, y de aquella moralidad puritana e hipócrita que ilegalizaba las bebidas alcohólicas mientras toleraba la explotación y la rapacidad en los negocios. Esa Norteamérica de aparente prosperidad sin límites era, al mismo tiempo, el país que persiguió las ideas sociales renovadoras, que asesinó a Sacco y Vanzetti, y que impulsó al autoexilio a sus mejores escritores. Era un país capitalista próspero, regido enteramente por la gran burguesía que imponía sus ideas y valores y reprimía a sus críticos. Pese a la prosperidad, un tercio de la población vivía en la pobreza: su baja capacidad de consumo —determinada, por otra parte, por la grave situación mundial— sería la causa fundamental de la recesión.

Para 1929 se había producido más de lo que se podía vender y había crecido desproporcionadamente el volumen de inversiones especulativas. De repente, en octubre de 1929, cundió el pánico en Wall Street. Llenos de alarma los especuladores comenzaron a vender frenéticamente sus papeles, cuyos valores descendieron bruscamente. A los pocos días, por falta de crédito y por la imposibilidad de vender sus productos, las empresas comenzaron a cerrar sus puertas y a arrojar a sus trabajadores a la calle. Al cabo de pocos meses era ya general la crisis en Estados Unidos y el número de desocupados ascendía a varios millones.

Rápidamente la depresión se extendió del principal centro financiero a las demás regiones del mundo. Todos los países capitalistas, desarrollados y subdesarrollados, dominantes y dependientes, quedaron sumidos en la crisis. A la angustia de millones de trabajadores sin empleo se sumó la de los empresarios en quiebra o carentes de fuentes de financiamiento. Como consecuencia de ello, se acentuaron en todas las naciones las contradicciones sociales y las tensiones políticas. Burgueses, proletarios y capas medias se inclinaron a buscar fórmulas políticas extremas.

Latinoamérica sufrió duramente el impacto de la crisis económica mundial. Por la disminución de la producción en los centros industrializados, éstos redujeron bruscamente sus compras de materias primas y de productos básicos en general. Debido a ello se agravó la miseria de las masas latinoamericanas y se debilitó incluso el poder económico de las oligarquías. Así, en América Latina como en el

resto del mundo, se fortalecieron los extremismos políticos y se multiplicaron las iniciativas autoritarias o dictatoriales.

En las elecciones norteamericanas de 1932, dominadas por los problemas de la recesión, triunfó el Partido Demócrata con su candidato Franklin D. Roosevelt. Este extraordinario estadista propuso a la nación norteamericana fórmulas nuevas y audaces para superar la crisis. Fue partidario de pasar del *laissez-faire* al capitalismo parcialmente controlado e intervenido por el poder público. Por los métodos recomendados por John M. Keynes, tales como el *deficit spending* y grandes inyecciones de fondos públicos a la economía privada, se ampliaría el crédito, se estimularía la producción estancada y se crearían puestos de trabajo.

Roosevelt cumplió con sus promesas. Sacó a su país de la crisis económica. Salvó el sistema capitalista, obligándolo a aceptar la tutela parcial del Estado y a dar cabida a medidas de reforma social, útiles no sólo para aliviar la miseria y las tensiones entre clases y grupos, sino también para crear capacidad de consumo. Su programa del "New Deal" (Nuevo Trato) comprendió grandes obras públicas para dar trabajo a los desempleados y estimular la demanda y la producción; control provisional de precios; proyectos de desarrollo regional en las zonas estancadas del país; subsidios agrícolas; creación del sistema federal de crédito; estímulo decidido al sindicalismo y a la contratación colectiva; y medidas de redistribución del ingreso, a través del impuesto sobre la renta y la creación de un sistema de seguridad social, así como importantes gastos públicos en educación y salud. Los grupos de izquierda, inicialmente escépticos, pronto dieron su apoyo a Roosevelt, quien se convirtió por doce años en el caudillo democrático de su país, encabezando de hecho un frente popular que abarcaba a liberales, socialdemócratas y núcleos socialistas radicales.

La política exterior de Roosevelt fue la lógica extensión de su política interna. Así como el Estado federal regulaba internamente las actividades económicas y obligaba a la clase capitalista a acatar su autoridad, en el plano de las relaciones exteriores procuró colocar también las decisiones de tipo democrático por encima de los intereses de grupos imperialistas. En relación con América Latina, esa nueva política exterior se denominó la "política del buen vecino". Consistió en una actitud de mayor respeto a la soberanía de los países latinoamericanos y un intento de desvincular un tanto las iniciativas diplomáticas estadounidenses de los intereses de los inversionistas.

La nueva línea "blanda" hacia América Latina se explica por dos factores. Por una parte, el debilitamiento del sector capitalista dentro de Estados Unidos, por efecto de la recesión económica, aumentó la autonomía y el poder del Estado democrático, permitiéndole eventualmente adoptar decisiones que respondieran más a los intereses populares que a los de los grupos económicos privilegiados. Por la otra, Estados Unidos para 1933 tenía su poder económico y su influencia política bastante consolidados en América Latina, pudiendo permitirse una actitud más reposada y liberal que en las décadas anteriores.

Roosevelt, el Caribe y México

En 1933 la "política del buen vecino" se tradujo en el retiro de las fuerzas armadas norteamericanas de la República de Haití. Pese a ello, evidentemente, la

influencia económica y diplomática norteamericana desempeñó un papel importante en ese país.

República Dominicana había quedado libre de la ocupación norteamericana en 1924; no obstante, hasta 1930 continuaron las presiones directas sobre el país. Cuando Trujillo implantó su dictadura, los inversionistas yanquis se sintieron bien protegidos. Después de 1933, Roosevelt continuó la práctica —ya establecida por su predecesor Hoover— de mantener buenas relaciones con el tirano dominicano.

En 1933, un amplio movimiento democrático popular derrocó al dictador cubano Gerardo Machado. Sectores de las fuerzas armadas, dirigidos por el sargento Fulgencio Batista, se habían unido a las fuerzas políticas populares conducidas por Grau San Martín y otras importantes figuras de la democracia cubana. La caída de Machado causó alarma entre los inversionistas norteamericanos, convencidos de que los revolucionarios eran "comunistas". Los portavoces del capitalismo norteamericano pidieron a Roosevelt que aplicara la Enmienda Platt para intervenir en Cuba por la fuerza. Pero el nuevo presidente de Estados Unidos se abstuvo de tal acción, prefiriendo establecer relaciones con el gobierno democrático provisional de Cuba. Más aún: Estados Unidos acordó, en 1934, anular la Enmienda Platt y reconocer, a partir de ese momento, la irrestricta soberanía nacional de Cuba. Sin embargo, en el mismo año los gobernantes norteamericanos observaron con cierto beneplácito el golpe de Estado de Batista, que significó un viraje de las posiciones socialdemócratas de Grau San Martín hacia una política algo más conservadora. Si la no intervención y la renuncia a la Enmienda Platt causaron alegría y aprobación en Cuba, en cambio las visibles simpatías hacia el golpe de Batista provocaron una viva decepción entre los demócratas de la isla.

La "política del buen vecino" tuvo una aplicación relativamente convincente en el caso de las relaciones entre Estados Unidos y México. Pese a que a fines de 1930-1940 surgió una crisis en esas relaciones, Roosevelt resistió a las corrientes que trataban de impulsarlo hacia una línea belicista y acabó por arreglar pacíficamente una situación caracterizada por el choque diametral entre los intereses nacionales mexicanos y los de las poderosas empresas privadas estadounidenses.

En 1934 asumió la presidencia de México Lázaro Cárdenas, el más revolucionario de los mandatarios que ese país ha tenido. Cárdenas representó el ala izquierda del Partido Nacional Revolucionario y reflejó fundamentalmente los intereses de los obreros, los campesinos y los estratos humildes de la clase media. Ideológicamente avanzó más allá del mero nacionalismo y del reformismo social, acogiendo algunas ideas claramente socialistas. Bajo la dirección de Cárdenas, la reforma agraria recibió un decidido impulso: ningún presidente de México distribuyó más tierras entre los campesinos que este revolucionario sincero. Al mismo tiempo, Cárdenas adoptó nuevas medidas de nacionalismo económico y procuró poner límites a la tendencia de la nueva burguesía mexicana que deseaba llegar a acuerdos de colaboración con los intereses inversionistas extranjeros. Ante ese radicalismo de Lázaro Cárdenas, la derecha norteamericana reaccionó con una nueva ola de propaganda antimexicana.

En 1938 surgió una crisis en las relaciones entre el Estado mexicano y las empresas petroleras concesionarias en el país. Los trabajadores de la industria petrolera reivindicaron un aumento de salarios que fue negado por las compañías. El gobierno mexicano dictó un laudo arbitral en favor del aumento de salarios. Las

empresas desobedecieron la decisión del gobierno, colocándose en actitud de franco desaffo y desacato. Ante esa situación, Lázaro Cárdenas adoptó la decisión histórica de nacionalizar la industria petrolera mexicana.

Aunque el gobierno de México ofreció indemnizar a las empresas expropiadas descontando las sumas que las compañías debían a sus trabajadores —en conformidad con sus declaraciones de ingresos para los fines del impuesto sobre la renta—, los consorcios petroleros afirmaron que se les estaba sometiendo a una confiscación de tipo bolchevique. El gobierno de Washington, presionado por las compañías, exigió indemnizaciones más elevadas. Sin embargo, al mismo tiempo resistió a las corrientes más reaccionarias que exigían una intervención armada contra el gobierno de Cárdenas.

En un esfuerzo heroico, México comenzó a manejar su industria petrolera nacionalizada, renunciando al mercado exterior y poniendo el producto de su subsuelo al servicio de su desarrollo económico nacional. No se dejó vencer ni amedrentar por el boicot de las compañías petroleras transnacionales. Roosevelt, pese a las protestas de las compañías, aceptó entablar negociaciones con el gobierno mexicano, y se llegó a un acuerdo que las compañías tuvieron que aceptar porque no les quedaba otro remedio.

Era el primer caso en el cual Estados Unidos aceptaba una nacionalización de empresas norteamericanas. El hecho demostró que la "política del buen vecino" era algo más que mera palabrería. Por otra parte, México triunfó por su extraordinaria y combativa unidad nacional en defensa de su petróleo, desalentando así las tendencias divisionistas e intervencionistas. También favoreció a los mexicanos la coyuntura mundial: con el acuerdo sobre la nacionalización del petróleo, estaban dadas las condiciones para un mejoramiento de las relaciones entre México y Estados Unidos. Bajo el sucesor de Cárdenas, Avila Camacho, la Revolución Mexicana entró en su fase de "institucionalización" y de aburguesamiento, creándose un ambiente favorable para las inversiones foráneas en México.

La guerra del Chaco y sus consecuencias. Sudamérica de 1932 a 1941

La guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay estalló en 1932. Se debió, como ya lo señalamos antes, a la existencia de viejas controversias territoriales, agravadas por la codicia de intereses petroleros. La Esso influía sobre Bolivia y la Shell sobre Paraguay, y el conflicto armado entre los dos países —conflicto extremadamente sangriento y costoso en vidas humanas— era en parte producto de la rivalidad entre dos poderosos consorcios transnacionales.

Paraguay llevó la mejor parte en este conflicto al impedir que Bolivia se apoderara del territorio que consideraba suyo. Después de reiterados esfuerzos de mediación, realizados por la Sociedad de las Naciones y por Estados Unidos, los dos Estados beligerantes firmaron la paz en 1935, en Buenos Aires. Ambos ratificaron el tratado de paz en 1938.

Tanto en Paraguay como en Bolivia la guerra del Chaco fortaleció extraordinariamente la influencia de los militares. Los hombres que habían tenido mando militar durante la guerra se sintieron con autoridad para mandar también en tiempo de paz. En Paraguay las fuerzas armadas tomaron el poder y proclamaron en 1936

el Acta Plebiscitaria que dice que "la soberanía del pueblo reside en las fuerzas armadas". Los veteranos de la guerra del Chaco siguieron gobernando en Paraguay con una política de tipo derechista, defensora de las estructuras sociales existentes y de los intereses de los grupos económicos dominantes, nacionales y extranjeros.

En Bolivia, debido a la derrota sufrida, subieron al poder militares de actitud crítica ante el sistema social y político existente. En 1936 el coronel David Toro asumió el mando del país con un programa de gobierno nacionalista y de reformas sociales. Fue seguido en el poder por el teniente-coronel Germán Busch, hijo de un médico alemán casado con una boliviana. Como nacionalistas identificados con los intereses de las capas populares en contra de la oligarquía y los grupos financieros foráneos, Toro y Busch estaban decididos a realizar importantes transformaciones estructurales mediante métodos autoritarios. En resguardo de la soberanía nacional boliviana, y tomando en cuenta la participación de los consorcios petroleros en la guerra del Chaco, Toro decretó la nacionalización de las instalaciones de la Standard Oil de Nueva Jersey (Esso) en Bolivia. El acto nacionalista provocó una protesta de Estados Unidos, y gritos de ira y de alarma de las compañías petroleras. Después de haber golpeado de ese modo al imperialismo económico, Busch se preparó para atacar a la oligarquía latifundista y minera. Sus planes para el futuro incluían una reforma agraria y la nacionalización de las minas de estaño. Pero ese militar revolucionario murió antes de poder cumplir sus propósitos. Su muerte violenta —por un balazo en el cerebro— aparentemente se debió a un impulso suicida inducido por maniobras insidiosas y subversivas de la oligarquía.

Durante la década de los años treinta Brasil vivió una experiencia importante bajo el gobierno del presidente Getulio Vargas, caudillo reformista y centralizador. La crisis económica de 1930 golpeó duramente Brasil y sus tensiones políticas internas se agravaron. Por un lado, los comunistas dirigidos por Luis Carlos Prestes desarrollaban una fuerte agitación, y por el otro, actuaba un fuerte partido fascista: los integralistas, encabezados por Plinio Salgado. Vargas creó el movimiento laborista que surgió como tercera fuerza entre estos extremos, y tomó el poder por un golpe de Estado. Posteriormente quedó ratificado por elecciones. Admirador de Mussolini, aunque ubicado en una posición mucho más liberal, en 1936 cambió la Constitución brasileña y proclamó el "Estado Novo", autoritario y con tendencias corporatistas. Sin embargo, el Estado Novo jamás llegó a ser fascista: más bien la política social de Vargas promovió el ascenso de las clases trabajadoras mediante el estímulo al sindicalismo. Se adoptó una legislación social que trajo beneficios a las mayorías populares, olvidadas antes de que Vargas llegara al poder. La oligarquía rural y bancaria miraba al caudillo con desconfianza, debido a sus pronunciamientos radicales, aunque de hecho sus privilegios apenas fueron afectados. En su política exterior y económica Vargas pregonó el nacionalismo y mostró el empeño en desarrollar Brasil de manera autónoma, con creciente independencia frente al capital extranjero.

El mussolinismo de Vargas inquietó a Roosevelt, quien temía que el caudillo brasileño llevaría a su país a un acercamiento con las potencias del Eje. Sin embargo, después de haber obtenido ventajas económicas por parte de Estados Unidos, Getulio Vargas se mostró partidario de la política antinazi de Estados Unidos y, durante la Segunda Guerra Mundial, Brasil fue el único país latinoamericano que participó activamente en los combates. Aparte de la persuasión que Estados Unidos

pudo ejercer sobre Brasil, Getulio Vargas era realmente más demócrata que fascista. Así mismo, la tradición diplomática brasileña, establecida desde la época de Rio Branco, recomendaba el mantenimiento de relaciones armoniosas con la principal potencia hegemónica del hemisferio.

La evolución política argentina traería mayores problemas para Estados Unidos. Desde el golpe de Uriburu contra Irigoyen en 1930, Argentina quedó bajo el gobierno de las clases capitalistas y terratenientes. Se restableció la democracia representativa pero ésta adquirió un carácter formalista, sin contenido social para las masas del país. Tanto en la oligarquía como en el seno de las capas medias y populares se desarrollaron corrientes antidemocráticas y antiliberales. Incluso para algunos oligarcas la democracia formalista y plutocratizada no garantizaba suficientemente la defensa de sus privilegios, motivo por el cual esa ultraderecha se inclinaba hacia el fascismo y hacia el Eje. Por otra parte, existían sectores de la burguesía argentina que tenían vínculos comerciales y financieros con empresas alemanas, y por ese motivo eran partidarios de la causa de Hitler. Las caudalosas e influyentes colonias de inmigrantes italianos y alemanes creaban un ambiente favorable a las potencias del Eje. Por último, entre algunos intelectuales y en la oficialidad de las fuerzas armadas había una forma de nacionalismo antiimperialista y antioligárquico que simpatizaba con el nazismo y el fascismo. Estos pronazis "sociales" identificaban la democracia liberal con el imperialismo angloamericano y con la oligarquía que manipulaba el sistema político entre bastidores y lo ponía al servicio de sus intereses. Razonando simplistamente con el argumento de que "el enemigo de mi enemigo debe ser mi amigo", y creyendo ingenuamente en la propaganda nazi que les presentaba el sistema hitleriano como un presunto "socialismo nacional", estos radicales autoritarios constituían un importante grupo de presión a favor de una política exterior de neutralidad entre la alianza angloamericana y el Eje, con velada simpatía hacia este último. Bajo la presión directa o indirecta de esos diversos sectores proalemanes y antiingleses, la República Argentina se mostró reacia a acompañar a Roosevelt en su campaña contra el peligro de la infiltración nazi-fascista en América Latina.

Finalmente, la etapa 1933-1941 estuvo marcada por un feroz enfrentamiento entre Perú y Ecuador, similar al de la guerra del Chaco. Las hostilidades estallaron en 1941 y se saldaron con un triunfo peruano y la anexión por ese país de 200.000 kilómetros cuadrados de selva, cuyo subsuelo contiene petróleo. A consecuencia de ese conflicto Ecuador perdió sus derechos históricos sobre el Amazonas. Como en la guerra del Chaco, estuvieron involucrados intereses petroleros. Esta vez la Standard Oil, que tenía concesiones en Perú y apoyaba a ese país, triunfó sobre la Shell, que respaldaba a Ecuador. Estados Unidos interpuso su mediación, favorable a Perú. El asunto fue discutido en Río de Janeiro, en la III Reunión de Consulta de Cancilleres Americanos, en 1942, y se suscribió el protocolo de Río, por el cual quedó formalizada la derrota de Ecuador.

Reuniones interamericanas.

La diplomacia antinazi de Roosevelt hasta 1940

Después de la I Conferencia Interamericana de 1889-1890 se efectuaron otras reuniones de los Estados americanos, en las cuales Estados Unidos continuó sus

gestiones encaminadas a tratar de crear un sistema de seguridad regional bajo su hegemonía y una comunidad económica hemisférica dominada por el capital norteamericano.

La II Conferencia Internacional Americana se llevó a cabo en México en 1901. El arbitraje constituyó el tema principal. Estados Unidos insistió en la necesidad de mantener el orden en todos los países de América para que no hubiese intervenciones extracontinentales. Dejaron entrever que ellos mismos podrían intervenir preventivamente si el orden sufría serios trastornos en la región.

La III Conferencia, en Río de Janeiro, se realizó en 1906, y reorganizó la Oficina Internacional de las Repúblicas Americanas. En la IV Conferencia (Buenos Aires, 1910) se adoptó el nombre de Unión Panamericana. En esa reunión, la delegación brasileña cuestionó el valor y la vigencia de la Doctrina Monroe, provocando el desagrado de Estados Unidos. Este país admitía que se pusiera en duda su derecho a intervenir en los demás países de América "para proteger las vidas y propiedades de sus nacionales", ni que se negaran las virtudes de la Doctrina Monroe.

Después de la Primera Guerra Mundial, se reunió la V Conferencia Interamericana, que tuvo lugar en Santiago de Chile, en 1923. Los gobiernos latinoamericanos, bajo el impacto de la ideología de Wilson y los principios de la Sociedad de las Naciones, plantearon la renovación de las relaciones interamericanas. Estados Unidos, en conformidad con los ideales democráticos proclamados por su ex presidente en sus Catorce Puntos, debería renunciar a su posición privilegiada de hermano mayor entre las naciones americanas. Para esa época, la Comisión Directiva de la Unión Panamericana tenía un presidente con mandato indefinido, de nacionalidad y designación norteamericanas. Estados Unidos inicialmente se opuso a la sugerencia latinoamericana de que el presidente de la comisión fuese de alguno de los países pequeños y elegido libremente por un lapso limitado, pero eventualmente llegó a aceptar el punto de vista latinoamericano al respecto. Así mismo dijeron "no" a la propuesta uruguaya de que la Doctrina Monroe fuese multilateralizada, sustituyendo la seguridad colectiva por la hegemonía protectora de un solo país. Uruguay sugirió que se crease una Sociedad o Liga de los Estados Americanos, similar en escala regional a la Sociedad de Naciones en el plano mundial. Estados Unidos, que en 1920 había rechazado a Wilson y sus ideas, negándose a formar parte de la Sociedad de Naciones, adoptó una actitud de completo rechazo a las ideas progresistas de la delegación de Uruguay. La delegación de Washington dijo que la Doctrina de Monroe era intocable y que su país se reservaba el derecho de actuar unilateralmente para proteger los intereses de sus nacionales. Finalmente, fue adoptado el Tratado Gondra para prevenir conflictos entre Estados americanos.

La VI Conferencia Internacional Americana se reunió en La Habana en 1928. En esa oportunidad, los latinoamericanos presentaron una serie de propuestas jurídicas y políticas de carácter renovador. La intervención norteamericana en Nicaragua, las presiones de Estados Unidos contra México, y la continuación de la ocupación de Haití y de las aduanas dominicanas, estaban causando tanto desagrado en la opinión pública de los países de Latinoamérica que incluso gobiernos y juristas de orientación conservadora y proyanqui se vieron impulsados a hacerse eco del descontento existente. Se discutieron en La Habana los principios del derecho internacional americano y, al lado de temas como el del asilo diplomático, se planteó

con insistencia la cuestión de la no intervención. Para todos los latinoamericanos el principio de la no intervención debía constituir uno de los principales pilares del orden jurídico interamericano. Pero la delegación norteamericana se opuso a tal idea y se negó a suscribir cualquier texto que estableciera el principio de la no intervención. Según los hombres de Washington, todo Estado soberano tiene el derecho absoluto e inalienable de intervenir en países donde se ponga en peligro la vida o la propiedad de sus nacionales.

La Conferencia Internacional de Estados Americanos sobre Conciliación y Arbitraje (Washington, diciembre de 1928 a enero de 1929) respondió a un intento norteamericano de impulsar nuevamente la creación de mecanismos de arbitraje y solución pacífica, por los cuales Estados Unidos podría ejercer mejor su papel de *primus inter pares* en el ámbito hemisférico. Argentina, siempre abanderada de una cierta resistencia a las iniciativas hegemónicas del Norte, no asistió. La conferencia adoptó una convención general de conciliación interamericana y un tratado general interamericano de arbitraje.

Pero con la llegada de Franklin Roosevelt a la Casa Blanca, y la puesta en vigencia de la Política del buen vecino, cambió la actitud de Estados Unidos con respecto al principio de la no intervención. En la VII Conferencia Interamericana, reunida en Montevideo en 1933, el secretario de Estado Cordell Hull declaró solemnemente que los días del intervencionismo habían pasado y que Estados Unidos se unía a los demás países del hemisferio en la aceptación del principio de la no intervención. Las diferencias entre países americanos deberfan resolverse por medios pacíficos y procedimientos multilaterales. Ante la petición haitiana de que cesara la ocupación yanqui, ante la exigencia cubana de que se anulara la Enmienda Platt, y ante las críticas mexicanas y argentinas contra el conjunto de la política estadounidense, formada de presiones y de prepotencia, Cordell Hull prometió una nueva política —la del buen vecino— y el fin de las relaciones imperialistas. Efectivamente, al poco tiempo esa promesa se cumplió, como ya lo señalamos, con respecto a Haití y Cuba. En 1936 se modificó ligeramente el Tratado Hay-Bunau-Varilla, eliminando las cláusulas intervencionistas similares a la Enmienda Platt.

Desde 1935 en adelante, Franklin Roosevelt comenzó a preocuparse por el peligro que el nazi-fascismo significaba para la paz del mundo. Más lúcido y menos inclinado a componendas con la ultraderecha que los mandatarios conservadores de Inglaterra y Francia, el presidente norteamericano creyó necesario forjar un sistema defensivo firme contra las pretensiones de Hitler y de Mussolini. En 1936, ante la remilitarización de Renania y la intervención germano-italiana en la guerra civil española, así como la creciente actividad de propagandistas nazis y fascistas en América Latina, Roosevelt propuso al gobierno argentino que convocara a una Conferencia Interamericana Extraordinaria para la paz. La conferencia fue convocada y se reunió en Buenos Aires, con la asistencia personal de Franklin Roosevelt. Este habló de la necesidad de que los países americanos adoptasen mecanismos de consulta para su defensa común contra agresiones provenientes de fuera del hemisferio. Ello significó multilateralizar la Doctrina Monroe. Dentro del espíritu de las sugerencias de Roosevelt, la conferencia adoptó un pacto de consulta para coordinar los mecanismos existentes en materia de mantenimiento de la paz: el Tratado Gondra para evitar y prevenir conflictos, de 1923; el Pacto Kellogg de renuncia a la guerra, de 1928; la Convención General de Conciliación, firmada en

Washington, en 1929; el Tratado General Interamericano de Arbitraje (Washington, 1929); y el Tratado de No Agresión y Conciliación (Pacto Saavedra Lamas), de Río, 1933. Además, en un protocolo, la conferencia reafirmó el principio de la no intervención. Argentina se opuso a compromisos más firmes de defensa conjunta.

En la VIII Conferencia Internacional de Estados Americanos (Lima, diciembre de 1938), el secretario de Estado Cordell Hull se esforzó por conseguir la adopción de mecanismos más eficaces de defensa contra la infiltración y posible agresión de las potencias del Eje. En toda Latinoamérica, las quinta-columnas nazis tenían una gran actividad y cosechaban éxitos, basando su propaganda en los sentimientos antiimperialistas dirigidos contra la influencia norteamericana y británica. Ocultando los aspectos racistas de su ideología, los nazis se presentaban ante los nacionalistas populares de Latinoamérica como "socialistas nacionales" empeñados en una lucha de liberación contra el imperialismo anglosajón. Al mismo tiempo, se mostraban ante las oligarquías reaccionarias como consecuentes anticomunistas y defensores de la propiedad y el orden establecido. Para desbaratar la conspiración nazi, Hull propuso un frente sólido, con definidos compromisos de defensa mutua y conjunta, contra las "naciones agresoras". La República Argentina se opuso a tal compromiso: la influencia económica alemana y las tendencias pronazis de algunos de los sectores de su población la impulsaban a tal actitud.

En los meses siguientes a la VIII Conferencia, el gobierno norteamericano, junto con el inglés, hizo lo posible por convencer a los Estados latinoamericanos para que adoptasen medidas de defensa política, económica y cultural, contra la labor de las quinta-columnas. Al mismo tiempo, intensificó sus esfuerzos por incrementar su propia influencia y ganar amistades a través de importantes préstamos y otros tipos de ayuda financiera. En el mes de marzo de 1939 firmó un acuerdo con el Brasil de Getulio Vargas, estableciendo las bases de una colaboración más estrecha, con ayuda financiera norteamericana y consultas políticas entre los dos gobiernos.

Después de estallar la Segunda Guerra Mundial en Europa, Estados Unidos convocó a los países latinoamericanos a una reunión de consulta de cancilleres, que era un nuevo mecanismo ideado en la Conferencia Extraordinaria de Buenos Aires y la VIII Conferencia de Lima. La I Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados Americanos se celebró en Panamá, del 23 de septiembre al 3 de octubre de 1939. El tema era el de la preservación y la defensa de la neutralidad del hemisferio. Se resolvió proclamar una zona hemisférica de neutralidad, dentro de cuyos límites (líneas noroeste-sudeste trazadas en el Atlántico y en el Pacífico a cierta distancia de los contornos generales de las costas del hemisferio) las potencias beligerantes se abstendrían de realizar actos de guerra. Al mismo tiempo, se emitió una declaración general de neutralidad de los países de América.

Los ingleses se mostraron dispuestos a respetar la zona neutral hemisférica, pero no así los alemanes, cuyos submarinos comenzaron a atacar y a hundir barcos aliados en la inmediata vecindad de las aguas territoriales de los países americanos.

En 1940, después de la caída de Holanda y Francia, se celebró la II Reunión de Consulta de Cancilleres Americanos. Esta vez la principal preocupación norteamericana era el destino de las dependencias en América de los países europeos ocupados por los nazis. Si Martinica, Guadalupe y Guayana Francesa quedaban en manos del régimen colaboracionista de Vichy, y si los alemanes resolvían ocupar

las colonias holandesas de Curazao, Aruba, Bonaire y Suriname, el Eje había penetrado al corazón mismo del hemisferio occidental, a la zona clave cercana al Canal de Panamá y al petróleo de Venezuela. Por ello, la reunión de consulta de 1940, que se efectuó en La Habana, adoptó una convención sobre colonias europeas en América, estipulando que éstas serían puestas bajo la administración provisional de los Estados americanos, en caso de que sus amos tradicionales no pudiesen seguir administrándolas o tratasen de traspasar su gobierno a otras potencias no americanas. Así mismo, el Acta de La Habana ratificó la neutralidad de las Américas y la decisión común de defenderlas.

De esa manera, para 1940, la Política del buen vecino de Franklin Roosevelt había logrado unir a los países americanos en torno a la defensa del orden hemisférico establecido contra amenazas provenientes de las potencias del Eje. Estados Unidos consiguió esa unificación de voluntades a través de una combinación de presiones económicas y llamados a la conciencia democrática y antifascista de los pueblos del hemisferio.

Las Américas durante la Segunda Guerra Mundial (1941-1945)

La Segunda Guerra Mundial tuvo un efecto estimulante sobre el desarrollo económico y social de los países latinoamericanos, fundamentalmente a partir de la entrada de Estados Unidos al conflicto. Al mismo tiempo, despertó nuevas y más avanzadas inquietudes políticas e ideológicas.

Uno de los efectos económicos del conflicto mundial, a partir de 1939, fue el alza de los precios de materias primas directa o indirectamente empleadas en el esfuerzo bélico de las potencias en guerra. Los países latinoamericanos productores y exportadores de tales materias primas disfrutaron de un incremento considerable de sus ingresos nacionales, elevándose junto con ello su ritmo productivo y su nivel de vida.

Más importante aún fue el impacto positivo que tuvo sobre las economías latinoamericanas la brusca disminución de ciertas exportaciones norteamericanas y europeas. Diversos e importantes artículos de consumo y bienes de producción, que hasta entonces habían sido importados desde Estados Unidos, Inglaterra o Alemania, pronto dejaron de ser suministrados por esas fuentes tradicionales de abastecimiento. Latinoamérica se vio forzada por las circunstancias a iniciar un rápido proceso de sustitución de importaciones en una amplia gama de renglones. En todas las naciones situadas al sur del Río Bravo se intensificó extraordinariamente la creación y la diversificación de industrias manufactureras.

Se trataba de un proceso de industrialización autónoma. La escasez de bienes importados estimuló la creatividad nacional de los países de América Latina. Surgieron burguesías nacionales industriales y se fortalecieron los núcleos empresariales progresistas ya existentes. Al mismo tiempo, creció y se desarrolló cualitativamente la clase obrera industrial, minera y de servicios en todo el continente latinoamericano. Así mismo, creció el número y la diversidad de los profesionales y técnicos, integrantes de una clase media no tradicional, de mentalidad renovadora.

Por su misma naturaleza, esos nuevos grupos sociales ascendentes eran

portadores de ideas democráticas y liberadoras. A los factores objetivos se sumó, además, el impacto ideológico internacional de la guerra antifascista. El ejemplo de la lucha de las potencias aliadas y la resistencia de los pueblos ocupados por fuerzas fascistas inspiró a los latinoamericanos en un sentimiento de rebeldía contra las dictaduras, el imperialismo y las oligarquías.

De ese modo, durante la Segunda Guerra Mundial América Latina vivió cambios importantes —en algunos casos cambios, incluso, estructurales— desde sistemas semif feudales hacia sociedades capitalistas con apreciables niveles de urbanización y cierto grado de industrialización.

En el plano político y militar, para las Américas la señal del combate sonó el día 7 de diciembre de 1941, cuando las fuerzas aeronavales japonesas atacaron por sorpresa la base norteamericana de Pearl Harbour. El gobierno de Washington declaró la guerra a Japón, siendo a su vez objeto de declaraciones de guerra por parte de Alemania e Italia. Para el 11 de diciembre Norteamérica estaba en conflicto con las tres potencias del Pacto Tripartito.

De inmediato, el gobierno de Washington llamó a los demás países del continente para una III Reunión de Consulta, que se realizó en Río de Janeiro entre el 15 y el 28 de enero de 1942. Se discutió la posición que las potencias americanas debían adoptar ante el acto de agresión extracontinental de que había sido víctima Estados Unidos. La reunión de consulta recomendó que los países latinoamericanos, en solidaridad con Estados Unidos, y en aras de su propia seguridad y defensa, rompieran sus relaciones diplomáticas y económicas con Alemania, Italia y Japón. Así mismo, se resolvió crear una Junta Interamericana de Defensa y una Comisión Asesora para la Defensa Política.

Posteriormente, Estados Unidos realizó esfuerzos por convencer a los países americanos que declarasen la guerra al bloque nazi-fascista-japonés. Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Cuba, Panamá y República Dominicana —países sometidos de manera más directa a la hegemonía norteamericana— habían declarado la guerra de inmediato, en diciembre de 1941. En el transcurso de 1942, primero México y luego Brasil declararon la guerra al Eje y a Japón. Brasil fue el único país que participó en el conflicto con tropas; los demás se contentaron con medidas de guerra económica. Una brigada brasileña combatió en el frente italiano durante los años 1943-1944. Sus oficiales regresaron después de la guerra con elevado prestigio e influencia en el seno de las fuerzas armadas del país. Entre ellos figuraban los hombres que dirigirían el régimen militar brasileño desde 1964 en adelante.

Bolivia y Colombia declararon la guerra en 1943. Finalmente, un grupo de Estados que había permanecido como no beligerante efectuó declaraciones de guerra entre los meses de febrero y marzo de 1945, para poder formar parte de las Naciones Unidas. Estos países eran Ecuador, Paraguay, Perú, Chile, Venezuela, Uruguay y Argentina. Habían esperado hasta el final por motivos diversos. En el caso de Venezuela, donde el sentimiento proaliado y antifascista era universal, y donde se colaboró plenamente con los aliados en todos los ámbitos, se debió a un deseo de mantener la tradición de no beligerancia presente desde los orígenes de la República; Venezuela, de 1830 en adelante, jamás hizo la guerra a ningún país.

Argentina, en cambio, tuvo motivos muy distintos para demorar su entrada en el conflicto contra Alemania y Japón. Ya señalamos anteriormente la existencia de

una corriente pro Eje de considerable fuerza en Argentina. Las colonias alemanas e italiana residentes en el país eran grandes y en su seno existían quintas columnas activas e influyentes. El volumen de comercio argentino con Alemania era considerable. La dominación económica que el capitalismo inglés — más aún que el norteamericano — ejercía sobre el país había causado resentimientos y reacciones antiimperialistas. Eran pronazis y profascistas no sólo los agentes de las empresas germanas e italianas, y algunos sectores oligárquicos partidarios de un régimen autoritario de extrema derecha para defender sus privilegios de clase, sino también muchos nacionalistas de clase media — víctimas de la confusión ideológica — que opinaban que el presunto "socialismo nacional" de Hitler podía ser un aliado contra el imperialismo anglonorteamericano. En 1943, elementos de las fuerzas armadas dieron un golpe de Estado y tomaron el poder. La "Revolución Militar" de 1943 contenía elementos contradictorios. Entre los miembros de los grupos militares que dirigieron la revolución existían auténticos nazi-fascistas, nacionalistas pero reaccionarios en lo social, al lado de elementos nacionalistas reformistas de orientación favorable a los trabajadores y a las capas medias humildes. Entre estos últimos, pronto comenzó a descollar el coronel Juan Domingo Perón, quien se encargó del Ministerio del Trabajo y desde allí puso en práctica un exitoso programa de transformaciones para los obreros y la masa "descamisada". Perón fue el virtual creador de la Confederación General de Trabajadores, y con el apoyo del proletariado se esforzó por torcer el rumbo de la revolución militar hacia el populismo y la neutralización de los sectores verdaderamente nazis, fascistas y antisemitas en su seno.

En todo caso, la actitud de los dirigentes del gobierno militar era favorable a Alemania y Japón y, aunque las circunstancias no les permitió adoptar una línea totalmente inclinada hacia esas potencias, opusieron resistencia a las prestaciones de Estados Unidos — los norteamericanos querían que Argentina rompiera sus relaciones económicas y diplomáticas con Berlín y Tokio —, continuaron su intercambio comercial con Alemania, y toleraron las actividades propagandísticas de la quinta columna nazi. Prohibieron películas y libros antifascistas y censuraron la prensa en el mismo sentido. El primer gobernante militar, el general Ramírez, retrocedió ligeramente ante Estados Unidos en enero de 1944 y rompió las relaciones diplomáticas con Alemania y Japón. Los militares más antialiadados lo destituyeron y llevaron a la silla presidencial al general Farrell. Las relaciones argentino-estadounidenses empeoraron rápidamente. En junio de 1944, Estados Unidos llamó a su embajador y dejó su misión en Buenos Aires en manos de un encargado de negocios. Los antifascistas estadounidenses más vehementes pidieron la adopción de medidas coercitivas — posiblemente hasta el uso de las armas — contra una Argentina que en aquel momento parecía cerca de ser un Estado vasallo de Hitler. Algunas medidas fueron adoptadas efectivamente. En agosto y septiembre de 1944 el gobierno norteamericano congeló las reservas argentinas de oro y prohibió a barcos mercantes estadounidenses transportar cargas argentinas. El régimen de Farrell, desafiante, pidió una reunión de consulta de cancilleres para enjuiciar las medidas de presión económica aplicadas contra él por Estados Unidos. La convocatoria no prosperó, debido a que las demás repúblicas latinoamericanas, partidarias de la posición de Estados Unidos, miraban con antipatía la actitud argentina y se negaron a acceder a la solicitud de reunir a los cancilleres.

En lugar de ello, se congregó en México, en el Palacio de Chapultepec, del 21 de febrero al 8 de marzo de 1945, una Conferencia Interamericana Extraordinaria sobre los problemas de la guerra y la paz. Argentina, por su querrela con Estados Unidos y el bloque latinoamericano antifascista, no participó en la reunión. Los Estados asistentes debatieron los problemas previsibles del mundo de la posguerra, así como sus relaciones con el rebelde régimen argentino. Se adoptó el Acta de Chapultepec, referente a actos o amenazas de agresión contra cualquier república americana. El acta recomienda la adopción de un tratado de asistencia recíproca contra todo tipo de agresión extra o intracontinental, es decir, la multilateralización definitiva de la Doctrina Monroe. Así mismo, se resolvió que todos los países que aún no lo habían hecho, declarasen la guerra a las potencias enemigas y entrasen a formar parte de las Naciones Unidas. Con respecto a Argentina, hubo dos posiciones: una "dura", representada por Estados Unidos, y otra "blanda", defendida por la mayoría de las repúblicas latinoamericanas. Se resolvió dar una oportunidad a Argentina: si adhería a los principios del Acta de Chapultepec y abandonaba su neutralidad frente a Alemania y Japón, se le admitiría para formar parte de las Naciones Unidas y participar con pleno derecho en todas las actividades interamericanas futuras.

En vista de que los textos de las resoluciones de Chapultepec no herían el orgullo argentino, ese país aceptó. Así fue como el gobierno de Buenos Aires llegó por fin a declarar la guerra a la alianza germano-japonesa el 27 de abril de 1945, tres días antes del suicidio de Hitler y doce días antes de la capitulación incondicional de los nazis.

Bolivia también fue objeto de gran preocupación por parte de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. En los primeros años de ese conflicto, la oligarquía del estaño se enriqueció extraordinariamente, suministrando el estratégico mineral a los aliados. En nombre de la lucha "por la democracia" se reprimió a los obreros y se les explotó duramente. En 1942 centenares de trabajadores mineros en huelga fueron masacrados con ametralladoras. Este hecho provocó, en 1943, un golpe de Estado dirigido por el general Gualberto Villarroel con el apoyo del partido Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), falsamente denunciado como "nazi" por la oligarquía y los stalinistas. Con el apoyo de los civiles radicales del MNR, Villarroel reinició la política reformista de Busch. Su política exterior iba dirigida en contra de la dependencia del país ante los norteamericanos y los ingleses, cosa que trataron de aprovechar los nazis, que tenían simpatizantes entre los militares que siguieron a Villarroel.

Resumen

En general, la etapa de la Política del Buen Vecino se caracterizó por una considerable liberalización de la hegemonía norteamericana sobre la América Latina, y eventualmente por una cruzada conjunta de los países del hemisferio (con excepción de Argentina), bajo la jefatura de Estados Unidos, contra las potencias fascistas en la Segunda Guerra Mundial.

La liberalización mencionada se explica en parte por el debilitamiento del *establishment* capitalista norteamericano y el surgimiento de fuerzas populares en

Tabla 7

Tabla cronológica VII

Años	EEUU, México y el Caribe	América del Sur	Relaciones Interamericanas
1933	Retiro norteamericano de Haití. Caída de Gerardo Machado.	Guerra del Chaco desde 1932.	VII Conferencia Interamericana en Montevideo.
1934	Anulación de la Enmienda Platt. Lázaro Cárdenas, presidente.		
1935		Bolivia y Paraguay firman la paz en Buenos Aires	
1936		"Acta plebiscitaria" de las fuerzas armadas paraguayas. Coronel David Toro al mando de Bolivia. "Estado Novo" en Brasil.	Conferencia Interamericana Extraordinaria, Buenos Aires.
1937	Masacre de haitianos por Trujillo.	Expropiación de la Standard Oil en Bolivia.	
1938	Nacionalización del petróleo mexicano.	Ratificado tratado de paz Bolivia-Paraguay.	VIII Conferencia Interamericana, Lima.
1939		Muerte de Germán Busch. Acuerdo Roosevelt-Vargas.	I Reunión de consulta de Cancelleros Americanos, Panamá.
1940	Arreglo petrolero EEUU-México. Avila Camacho presidente de México.		II Reunión de Consulta, La Habana. Acta de la Habana. Resolución sobre colonias.
1941		Conflicto Ecuador-Perú.	Ataque japonés a Pearl Harbor.
1942		Protocolo de Río (Ecuador-Perú). Masacre de mineros bolivianos.	III Reunión de Consulta, Río. Creación de Junta Interamericana de Defensa. Diversas declaraciones de guerra al Eje.
1943		"Revolución militar en Argentina". Ascenso de Villarroel en Bolivia.	Neutralidad argentina y divergencias con Estados Unidos.
1944			Declaraciones de guerra. Se agrava la crisis Argentina-Estados Unidos. Más declaraciones de guerra.
1945		Ascenso de Perón.	Conferencia Interamericana Extraordinaria sobre los problemas de la Guerra y la Paz (Chapultepec). Acta de Chapultepec. Argentina cambia de actitud.

Estados Unidos, por efecto de la gran depresión de 1929-1933. En parte se debe a la madurez y sofisticación del equipo gobernante de Franklin Roosevelt, consciente de que la hegemonía de su país se mantenía mejor por métodos indirectos y reformistas que por la fuerza bruta. También influyó grandemente la necesidad en que se veía Estados Unidos de hacer concesiones para ganar amigos contra la amenaza nazi-fascista.

La Segunda Guerra Mundial tuvo un efecto estimulante en el desarrollo económico y social de los países latinoamericanos y contribuyó a echar las bases para futuros cambios estructurales o intentos para realizar tales cambios.